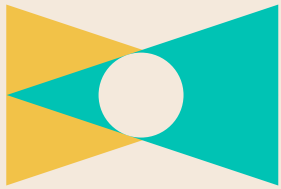




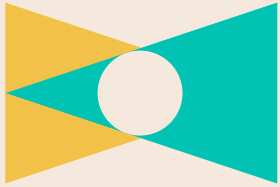
**BRÚJULA
PARA GANAR
ESTA DÉCADA**



BRÚJULA PARA GANAR ESTA DÉCADA

Nosotros y nosotras, en cada barrio y en cada pueblo de nuestro país de países, desde el lugar de trabajo, desde las organizaciones de la sociedad civil, en todos y cada uno de nuestros hogares y haciéndonos cargo del momento histórico en el que vivimos y de la enorme responsabilidad para con nuestro pueblo que conlleva el papel protagonista que estamos llamados a desempeñar, nos marcamos hoy un **ambicioso horizonte de país para alcanzar en esta década** y afirmamos hoy que la condición indispensable para que esta utopía posible pueda hacerse realidad es **encabezar el Gobierno de España como fuerza mayoritaria**.

En los últimos dos años hemos visto a una marabunta de ultraderecha asaltar el Capitolio en la principal democracia del mundo y a la Unión Europea suspender sine die la receta fracasada y neoliberal de la «austeridad» que, en 2008, decían que era la única alternativa. En casa, hemos experimentado en nuestra propia piel los efectos del cambio climático y la destrucción ecosistémica, con episodios como el temporal Filomena, el desastre ecológico en el Mar Menor o los incendios de sexta generación que han quemado miles de hectáreas este verano. También en España, hemos visto formarse el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia sustentado en una mayoría parlamentaria progresista y plurinacional, al tiempo que florecía con gran fuerza una nueva ola del movimiento feminista y surgía también —frente a todo ello— una reacción de ultraderecha con una violencia (discursiva e ideológica, pero también física en forma de delitos de odio) no vista desde el franquismo.



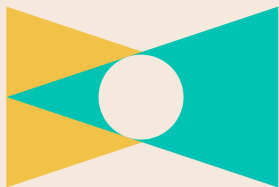
Mientras todo esto ocurría —y sobre todo— hemos vivido la peor epidemia en cien años con millones de muertos y cientos de millones de contagiados en todo el mundo. Un suceso evento sanitario, económico y social de ámbito planetario tras el cual ya nada será lo mismo.

Es en este **punto de inflexión histórico** en el que nos encontramos, y se nos exige inteligencia y humildad, pero también valentía y determinación para contestar con acierto a las preguntas de nuestro tiempo y convertir las respuestas en acción.

De dónde venimos lo sabemos. Venimos de la crisis-estafa de 2008. Venimos de las plazas. De unas plazas en las que señalamos a una élite privilegiada —que manda sin presentarse a las elecciones— como la verdadera culpable del empeoramiento de nuestras perspectivas de vida. De unas plazas en las que dijimos todo lo contrario a lo que estaba diciendo la opinión publicada e identificamos a los grandes poderes mediáticos como parte del problema, en las que denunciábamos que estábamos huérfanas de representación política porque los dos partidos del bipartidismo, a la hora de la verdad, llevaban a cabo las mismas políticas económicas. Venimos de que nos desafiaron a que «si queríamos cambiar las cosas, nos presentáramos a las elecciones».

Y venimos de hacer justo eso (sin pedir ni un euro a los bancos, por cierto). Venimos de acabar para siempre con el sistema del turno bipartidista, primero —electoralmente— en las elecciones europeas de 2014, después —parlamentariamente— en las elecciones generales de 2015 y, finalmente —a nivel de Gobierno— con el acuerdo de coalición en noviembre de 2019 (aunque, como veremos más adelante, el bipartidismo aún sigue fuerte y atrincherado en otros importantes —y no precisamente muy democráticos— lugares de poder). Venimos de largos años en los que hemos conseguido cambiar definitivamente el sistema de partidos a pesar de los salvajes intentos de demonización mediante bulos, cloacas, acusaciones falsas y acoso para intentar destruirnos, impedir que pudiéramos gobernar y, así, amañar y subvertir la democracia.

Venimos de algunas derrotas —somos conscientes de ello—, pero también venimos de vencerlos en algunas batallas muy importantes con pocas armas más allá de nuestras cabezas y nuestras manos. Venimos

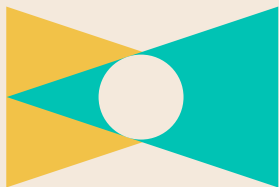


de sacar a la corrupción del Partido Popular de la Moncloa cuando todos sin excepción nos decían que no daban los números, y venimos de hacer volar por los aires una antidemocrática cláusula de exclusión histórica que impedía desde hace más de 80 años que millones de españoles con nuestras ideas pudieran ver su opción política legítimamente representada en el Gobierno.

Venimos de formar el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia y de demostrar —desde el Gobierno— que claro que se podía subir el salario mínimo más de un 30% en tres años; crear un ingreso mínimo vital —que habrá, sin duda, que mejorar—; recortar, por primera vez, los beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico; legalizar la eutanasia; impedir la venta a pérdidas de los pequeños y medianos productores del campo; salvar a millones de trabajadores y cientos de miles de empresas con los ERTE; crear la primera prestación por cese de actividad de la historia para autónomos; aumentar de forma nunca antes vista la financiación de la dependencia; derogar la ley Berlusconi, que permitía la impunidad de la corrupción; blindar por ley que «solo sí es sí»; regular los alquileres abusivos plantándonos ante los fondos buitres; hacer que las grandes corporaciones paguen lo que tienen que pagar en el impuesto de sociedades o mandar al basurero de la historia la receta fracasada de la austeridad.

Todas ellas medidas seguramente mejorables pero, al mismo tiempo, imposibles de imaginar antes de que llegásemos al Gobierno. Ya sabíamos que gobernar implicaba cabalgar contradicciones, pero nosotros hacemos nuestra la urgencia material de las mayorías sociales y, por eso, siempre hemos perseguido estar donde se pueden conseguir avances reales aquí y ahora. En política uno no es lo que dice, sino lo que consigue, y —con todas las dificultades y las aristas— es justo afirmar que, en muchas décadas, nadie había conseguido tanto. **Dijimos que, desde el Gobierno, íbamos a demostrar que sí se podían cambiar algunas cosas importantes y venimos de comprobar, con hechos y en tan solo dos años, que decíamos la verdad.**

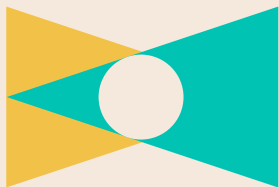
Pero también venimos —y esto hay que decirlo con toda claridad— de comprobar **los límites que implica ser el socio minoritario de un Gobierno encabezado por el PSOE.** Venimos de ver cómo se permitió la fuga del



emérito corrupto a una dictadura teocrática; cómo se impuso un diseño burocrático al ingreso mínimo vital que amenaza con hacerlo descarrilar; cómo se intentaron parar la ley trans, la reducción de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas o la regulación de los alquileres; cómo se pospuso ocho largos meses la subida del salario mínimo interprofesional en 2021; cómo se permite al PP seguir atrincherado en el Poder Judicial y mandar en Radiotelevisión Española; cómo se siguen haciendo políticas migratorias contrarias a los derechos humanos o cómo se facilitó la fusión entre Bankia y CaixaBank, renunciando a una banca pública que los españoles nos habíamos comprado rescatándola a escote con decenas de miles de millones de euros. Venimos también de estos aprendizajes y por eso sabemos que **en nuestro país, solo habrá cambios profundos cuando encabecemos el Gobierno como la parte mayoritaria.**

Venimos de la intensa reconfiguración política de los últimos diez años que nos ha dejado valiosos aprendizajes, pero también venimos, por supuesto, de todas las décadas —los siglos— de luchas populares por los derechos de los más y contra los privilegios de los menos que precedieron a las plazas y cuyos hilos rojos, morados y de todos los colores se entretrejieron en ellas. Sabiendo que **porque fueron, somos; y porque somos, serán.** De ahí también venimos y no debemos olvidarlo nunca, para saber quiénes somos, entender lo que ocurre en el ahora y dibujar horizontes de un futuro que valga la pena vivir.

Porque el presente es ambiguo y es necesario iluminarlo con la luz de lo vivido para no errar en el análisis. Es cierto que hemos pasado de que, en 2008, las élites económicas y sus brazos políticos y mediáticos repitieran como un mantra que no había alternativa a la «austeridad» —en lo que se llamó la doctrina TINA: There Is No Alternative— a que, en 2020, la UE haya levantado la cláusula del pacto de estabilidad, permitiendo ¡y animando! a todos los países miembro a hacer justo aquello que los hombres de negro de la troika impidieron hacer a Grecia dando un golpe de Estado financiero allá por 2014-2015. Es cierto también que de la TINA en 2008 hemos pasado a que, en 2020, la UE haya destinado más de dos billones de euros a inversión pública contracíclica —empezando a andar el camino hacia una deuda europea mancomunada— o a que, en España, se haya suspendido de facto

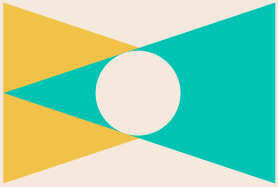


el infame artículo 135 de la Constitución, permitiendo, por dos veces, los Presupuestos Generales del Estado más expansivos de la historia de nuestro país y dando la razón a los que, en 2014, decíamos que la «austeridad» era una receta suicida. Pero, aunque todo esto haya ocurrido, debemos tener presente que los hombres de negro no están muertos sino escondidos y esperando su oportunidad para volver.

Aunque amplias mayorías sociales tengan claro que **el capitalismo financiero ha entrado en crisis —chocando violentamente con los límites materiales que imponen la vida de las personas y los recursos finitos de nuestro planeta— y aunque la pandemia haya dejado clarísimo que solo lo público está ahí para cuidar a las personas cuando vienen mal dadas**, no debemos olvidar la potente reacción neoliberal y privatizadora que, en España, tiene como epicentro ideológico el paraíso fiscal interior de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, no debemos cerrar los ojos ante las dinámicas estructurales y de fondo que se suelen construir con apretones de manos en las plantas más altas de los rascacielos y que pueden vivir durante décadas fuera del escrutinio público porque nunca tienen el foco mediático encima.

A pesar de estos aparentes cambios de paradigma de sabor emancipatorio, hay que recordar que, en España, la última década ha servido para aumentar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo que aumentaba el número de millonarios. Y, cuando los graves efectos de la anterior crisis todavía persistían en amplias capas de la población, llegó la pandemia como nuevo acelerante de la desigualdad. Solo en 2020 la desigualdad creció lo que había disminuido en los tres años anteriores (como consecuencia de una incipiente recuperación económica). La renta disponible del 10% más pobre de la población bajó en 2020 más de un 15% mientras que la del 10% más rico bajó solo un 2% y pasamos de 24 milmillonarios en España —personas con una riqueza superior a los 1000 millones de dólares— con un patrimonio conjunto de 97.000 millones de dólares a 26 con un patrimonio conjunto de 131.000 millones. Solo en un año.

La precariedad, la temporalidad, la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, la aparición de más y más corporaciones multinacionales con prácticas cada vez más agresivas hacia los derechos de los trabajadores y el ecosistema, los malos usos de las nuevas tecnologías para deshumanizar

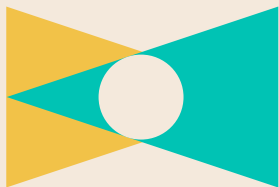


la economía, todo ello y la consiguiente inseguridad que se apodera de nuestras vidas a la hora de desarrollar un proyecto vital tiene como una de sus causas principales un cambio de largo alcance en la estructura planetaria de la propiedad y esto también debe informar el análisis.

Cada vez más, las grandes empresas en los países desarrollados no están en manos de la oligarquía local, sino que, progresivamente, son controladas por fondos de inversión internacionales. Solamente en España y en la última década, la participación de fondos extranjeros en el capital de las empresas del IBEX 35 ha pasado de un 38% a un 48%. Estos fondos, que no tienen más patria que su dinero y que solo buscan la rentabilidad económica a corto plazo sin importarles los efectos sociales o ecosistémicos que pueda tener su actividad —por eso se les llama «buitres»—, no tienen en su punto de mira únicamente las empresas estratégicas o la especulación con el derecho fundamental a la vivienda. Saben perfectamente que existe un enorme mercado potencial en el ámbito de los servicios públicos, si consiguen que estos sean privatizados, y **están deseosos de comprarlo todo —también la sanidad, la educación y los sistemas de cuidados—** para expandir su ámbito depredador y seguir inyectando precariedad e incertidumbre en nuestras vidas. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer con el ejemplo de las residencias de mayores durante los peores momentos de la pandemia.

Solo una democracia sana, un Estado fuerte y un Gobierno valiente que se plante ante los buitres podrán evitar esta nueva fase de saqueo de lo común. Por eso también —para que no se sigan comprando el país—, debemos encabezar el Gobierno de España como fuerza mayoritaria.

La caída en desgracia de la austeridad, los presupuestos históricamente expansivos, la fuerza democrática de la nueva ola feminista, la formación del Gobierno de coalición y la toma de conciencia por amplias capas de la ciudadanía acerca de los graves efectos del cambio climático y la destrucción ecosistémica, así como de la importancia de lo público a raíz de la epidemia, todo ello son señales de época que permiten albergar esperanzas en el futuro. **Pero todo punto de inflexión histórico es también una bifurcación y el futuro no está escrito.** La ebullición de nuestro presente puede llevarnos por un camino de ampliación de derechos, de reparto justo de la riqueza, de cumplimiento de los derechos humanos y de profundización democrática

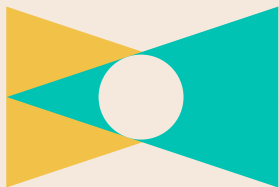


o puede llevarnos por el camino contrario: un camino autoritario, de mayor concentración del capital en manos de unos pocos, de venta de nuestros servicios públicos a fondos buitres y de más angustia e incertidumbre vital para las mayorías sociales. La partida se juega ahora y nos jugamos demasiado como para fallar en el análisis, en la estrategia o en la convicción.

La crisis de régimen —que se agrava progresivamente en España—, así como la evolución táctico-estratégica de los sectores más reaccionarios del país demuestran que ellos también son conscientes de que nos hallamos en un momento de bifurcación. Eso es precisamente lo que significa **la aparición de una ultraderecha sin complejos en el ámbito político, judicial, mediático y del Estado profundo.**

En realidad, se trata de una constante histórica. Cuando todo va bien para las élites económicas y sus privilegios no cesan de aumentar, los sectores más ultras se mantienen ocultos, prefieren la paz social y aceptan formalmente las reglas del juego democrático; pero, cuando aparece una posibilidad real de que pierdan influencia, privilegios y poder, entonces desconocen los resultados de las elecciones y sueltan la correa a sus milicias más violentas.

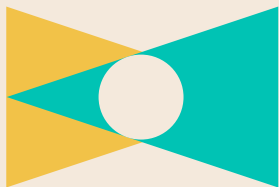
Al mismo tiempo, y esto también lo hemos vivido en estos años, se activan los sectores más reaccionarios en las diferentes instituciones democráticas, públicas y privadas, visibles y profundas. **De repente, ciertos actores que, en condiciones normales, deberían guardar al menos una apariencia de neutralidad para que funcione correctamente el sistema dejan de hacerlo.** Así, en los últimos años hemos visto cómo ciertos sectores de la judicatura y de los medios de comunicación han dejado caer las caretas y no hacen ya ningún esfuerzo por parecer árbitros. Se ponen a hacer política sin complejos y no solamente no intentan ocultarlo, sino que lo anuncian a los cuatro vientos y se jactan de ello. Como parte de esta estrategia más agresiva y en cierto modo desesperada —pero no por ello menos peligrosa—, también cabe destacar la reivindicación inflamada por parte de la derecha y la ultraderecha de otra figura que debería ser arbitral: el rey Felipe VI; con la amenaza evidente que esto supone para el futuro de la monarquía si a ello añadimos, además, los constantes escándalos de corrupción protagonizados por el rey emérito. De hecho, en esta deriva de pérdida absoluta de



complejos, estamos viendo incluso cómo la «Justicia» puede ser capaz de exonerar completamente el más grave caso de corrupción institucional que ha vivido nuestra democracia: el fraude fiscal masivo de Juan Carlos I, actuando durante cuatro décadas como supercomisionista ante dictaduras extranjeras, mientras amasaba una fortuna millonaria para pagarse un tren de vida de lujos obscenos y todo el sistema político-mediático lo encubría.

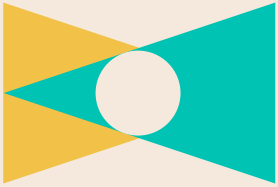
Esta dinámica de volatilización del capital mediador y la presunción de imparcialidad de importantes agentes del sistema democrático —una dinámica de quemar las naves, podríamos decir— es enormemente lesiva para el sistema democrático, ya que deteriora la confianza de la ciudadanía en ciertos pilares que son vitales para que una democracia funcione bien. De nuevo, la Justicia y los medios de comunicación son los mejores ejemplos. Sin embargo, no debemos considerar este efecto como indeseado por sus promotores. Muy al contrario, **uno de los objetivos principales de los reaccionarios es que el sistema social devenga menos democrático y más autoritario**, ya que solo así se puede obligar a la población a aceptar un mantenimiento de los privilegios de las élites mientras aumenta la desigualdad o la compra del país por parte de fondos buitres. Con una democracia sana y unas instituciones fuertes y prestigiadas, eso jamás podría pasar.

Frente a la estrategia reaccionaria del miedo y el odio al servicio del poder, nosotros y nosotras tenemos la obligación de poner encima de la mesa **un horizonte de país posible e ilusionante en el que todo el mundo pueda vivir no solamente vidas dignas sino más allá: vidas buenas**. Frente a los intentos de involución democrática, no debemos caer en la trampa de conformarnos con proteger lo bueno del presente o añorar un pasado idealizado. Si las élites económicas han soltado la correa a la ultraderecha es precisamente porque, desde el punto de bifurcación histórica en el que nos hallamos, se ve claramente que uno de los posibles caminos de futuro es el de las grandes alamedas que llevan a una sociedad más justa, más próspera y mejor, y la razón de ser de la reacción es —precisamente— evitar que lo transitemos.



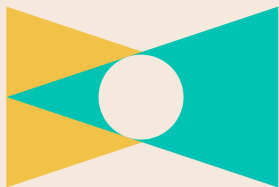
Pero nosotros y nosotras no hemos llegado hasta aquí para dejarnos amedrentar y conformarnos con lo que hay. Nosotros y nosotras queremos que se abran las grandes alamedas, porque pensamos que nuestro pueblo se lo merece y porque sabemos que es la mejor forma de pelear contra los que nos quieren precarias y sometidas. Y, para transitar ese camino posible hacia un futuro mejor, es fundamental —además de poner toda nuestra inteligencia, empatía y compromiso en el empeño— poder visualizar lo que nos espera en cada una de las etapas del viaje. Por eso **nos fijamos hoy los siguientes objetivos de país en esta década;** porque imaginar un futuro mejor que se pueda tocar con la punta de los dedos es una brújula, pero también es ganas de caminar.

En esta década, España tiene que tener **un Estado fuerte que pueda mantener unos servicios públicos universales y de calidad** que nos permitan hacer frente con seguridad a cualquier eventualidad sanitaria o climática cuidando a todas las personas del país. Si hay una enseñanza fundamental que tenemos que extraer de la epidemia de la COVID-19 es esta. El objetivo es que tanto la inversión relativa al PIB como el ratio de profesionales por cada 100.000 habitantes, así como el salario de dichos profesionales, en la sanidad, en la educación, en el sistema público de cuidados, en los servicios sociales y en los servicios de atención de emergencia sea superior a la media europea. En particular, es necesario un aumento muy significativo para alcanzar esta cota en el sistema público de salud mental, en la atención primaria, en la atención temprana y también en el sistema de especialidades para bajar la lista de espera por debajo de un mes en todos los casos. Además, las tasas de privatización de los mencionados servicios públicos, tanto en su modalidad completamente privada como en su modalidad concertada, deben reducirse —como mínimo— a la mitad, y la educación infantil de 0 a 3 años debe ser completamente universal y gratuita y mayoritariamente pública. En esta década, además, tenemos que transitar hacia un modelo de cuidados de larga duración en el que el internamiento residencial sea excepcional y un último recurso, primando la atención en el hogar; más intensiva en empleo y más respetuosa con la dignidad de nuestros mayores y de las personas con discapacidad. Se deberá prohibir cualquiera venta de nuestros servicios públicos o aumento de participación



en los mismos a fondos buitres extranjeros, empresas controladas por ellos y grandes multinacionales y, al final de la década, se deberá alcanzar la participación cero. Los mejores servicios públicos protegidos de las garras de los buitres, con los profesionales mejor pagados y cuidados y un potente motor de crecimiento económico con cientos de miles de nuevos empleos creados en estos sectores. Nosotros y nosotras también entendemos que una Policía, una Guardia Civil y unas Fuerzas Armadas democráticas son servicios públicos indispensables. Los multimillonarios no necesitan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado públicos, porque viven en urbanizaciones valladas y tienen seguridad privada. Quienes sí lo necesitamos somos la gente trabajadora. Por eso nos fijamos el objetivo de que, en esta década, se produzca un aumento salarial de la tropa y marinería superior todos los años al doble del aumento del salario mínimo y del aumento del IPC (es una vergüenza que estemos mandando soldados a la otra punta del mundo a jugarse la vida con un sueldo de alrededor de 1000 euros al mes) y se garantice el empleo público de todos los militares mayores de 45 años que hoy están siendo descartados sin alternativa y con una pensión muy escasa. En una década, asimismo, se deben garantizar los derechos laborales y de asociación sindical en la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, y mucho antes del final de la década se ha de eliminar el Código Penal Militar para la Guardia Civil cuando no se encuentre llevando a cabo tareas en un conflicto armado. Por último, y como elemento clave en su modernización y democratización, en esta década debemos alcanzar un porcentaje de mujeres en la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas de, al menos, el 50%.

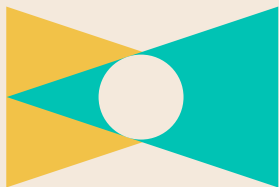
Porque, en el camino hacia ese horizonte de país más justo, tenemos que tener siempre presente que el movimiento feminista es quizás el vector de avance democrático más poderoso. En esta década se cumplirán ya 99 años desde que se aprobó la primera Constitución que nos permitía votar a las mujeres. En esta década tenemos que hacer posible el feminismo para el 99% del que nos habla Nancy Fraser. **Tenemos que blindar una nueva generación de derechos feministas**, que incluyen la libertad sexual, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, el derecho a ser, el derecho al cuidado o el derecho a vivir una vida libre de violencias machistas. Mucho antes del final de la década la financiación del Pacto de Estado debe



estar más que garantizada hasta que arranquemos de raíz todas las violencias contra todas las mujeres. Además debemos **cambiar, en esta década, el paradigma de los cuidados en este país con una transformación total del modelo actual** que pase de un Estado negligente a un Estado corresponsable; que cuidar sea una tarea que asuma el Estado, como educar o sanar, y que las personas que cuidan vean su trabajo profesionalizado. En esta década debemos conseguir que tener la regla o comprar pañales no haga que pierdas poder adquisitivo y que los permisos de maternidad y paternidad sean de 12 meses, con una prestación universal para el cuidado de hijos e hijas. Al final de esta década tenemos que conseguir que nadie se crea que hubo un tiempo en el que hombres y mujeres no cobraban lo mismo o que ser padre o madre era un motivo de discriminación laboral. Esta década también debe ser la década en la que **las personas LGTBI consoliden todos sus derechos y puedan desterrar los armarios de manera definitiva**. Al final de la década tienen que haber pasado muchos años desde que las mujeres lesbianas ya no tienen que casarse para tener un hijo o una hija, las personas trans no se ven condenadas al ostracismo y todes les no binaries hayan dejado de tener que explicar por qué no son hombres ni son mujeres. En esta década debemos conseguir que no sea un problema señalar en tu DNI un tercer género y que sea más que evidente que conquistar derechos para todas y todes siempre suma y no resta. En esta década debemos ver cómo una de las peores formas de explotación sexual, la compra de niños y niñas mediante gestación subrogada, y también los proxenetas son señalados por la sociedad y por la Ley de Libertad Sexual.

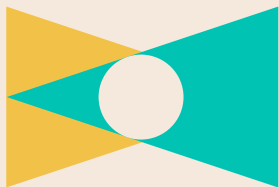
También en esta década **España tiene que recuperar su soberanía económica, industrial y productiva**, irresponsablemente desmantelada durante demasiado tiempo.

En esta década España tiene que contar con **empresas públicas en los principales sectores estratégicos**, que aporten transparencia a los mercados, que introduzcan competitividad real, que pongan el bien común por delante de cualquier otra consideración y que impidan —en definitiva— el control de facto del país por parte de oligopolios privados interesados únicamente en amasar crecientes beneficios. El Estado debe contar con empresas públicas al menos en los sectores energético, bancario,



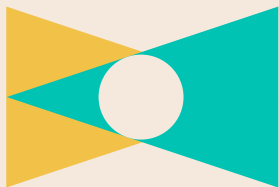
sanitario y farmacéutico y de las telecomunicaciones, alcanzando dichas empresas públicas una penetración de mercado de al menos el 15% en los correspondientes ámbitos. Por supuesto y mucho antes del final de la década, se debe prohibir la progresiva privatización de aquellos sectores estratégicos que son aún mayoritariamente propiedad del Estado, como la gestión de los aeropuertos o el transporte ferroviario. Con la escalada salvaje de la factura de la luz, ya hemos podido comprobar cómo un oligopolio privado es capaz de poner a un país entero de rodillas. Es una cuestión de seguridad nacional que las principales palancas de funcionamiento del país no estén en manos de poderes económicos descontrolados —y muchas veces extranjeros—, sino bajo control democrático y al servicio del interés general, como establece el artículo 128 de la Constitución. De la mano de lo público, también tenemos la obligación de proteger la parte más dinámica, más innovadora, más productiva, más respetuosa con los derechos laborales, con tributar en España y con el ecosistema —en su mayor parte, autónomos y pymes—, frente a los sectores más extractivos, más rentistas, más agresivos con la vida, más reticentes a pagar impuestos, menos innovadores y más improductivos, en su mayor parte, grandes corporaciones que consiguen los contratos (sin trabajar ni competir, ni innovar) en los palcos de los estadios de fútbol y gracias a su relación privilegiada con el poder político. En esta década tenemos que haber erradicado las prácticas de competencia desleal y abuso de posición dominante con las que, demasiadas veces, los más grandes atropellan a los más pequeños y lastran el conjunto de la economía y el avance del país.

En esta década, asimismo, España tiene que desplegar una estrategia de **soberanía productiva y alimentaria, de economía circular y consumo de proximidad, de garantía de la cadena de suministros y de abastecimiento de materias primas**. Con la epidemia de la COVID-19 ha aflorado también a nivel planetario un grave problema largamente anticipado por ecologistas, académicos y científicos: una crisis de suministro de materias primas. No solamente hablamos la escasez de gas natural y semiconductores, sino incluso de ciertos materiales de construcción o determinados alimentos. Por ello, es vital levantar toda una serie de complejas capacidades que nos permitan el autoabastecimiento en condiciones de volatilidad global. En esta década debemos estar en condiciones de afirmar que España

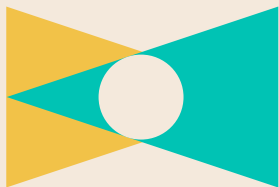


cuenta con una industria fuerte, localizada en nuestro propio suelo y capaz de producir buena parte de los materiales que conforman las complejas cadenas de producción modernas, así como con un sector primario rentable y protegido (mediante la fijación de precios mínimos y otras medidas) del abuso de posición dominante de las grandes corporaciones del agronegocio y de la distribución; un sector formado mayoritariamente por pequeños y medianos productores en régimen de ganadería, agricultura y pesca extensivas que no solamente garantice nuestra soberanía alimentaria como país sino que, además, suponga cientos de miles de empleos seguros, no deslocalizables y asentados en todo el territorio. En esta década todas las instituciones públicas, así como las empresas y los organismos dependientes de ellas, deben alcanzar una tasa del 100% de consumo alimentario de proximidad. Al mismo tiempo, hay que crear reservas estratégicas de las materias primas esenciales, así como una política de reciclaje avanzado que permita recuperar los materiales y elementos más escasos de los propios dispositivos y productos en una lógica de economía circular. No nos puede volver a ocurrir que llegue una pandemia mundial y no podamos fabricar mascarillas, equipos de protección o respiradores. No nos podemos permitir que nuestro pujante sector de fabricación de automóviles tenga que paralizar su producción por escasez de microchips. En esta década debemos aumentar significativamente nuestra soberanía productiva.

En esta década España **debe situarse, también, a la vanguardia mundial de la transición ecológica y energética.** El modelo económico español basado en sectores como la construcción no solo ha tenido un alto coste social, sino también ambiental. El futuro pasa necesariamente por un cambio de modelo que busque en la economía verde los cimientos de nuestra actividad. En esta década debemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% y nuestra dependencia energética del exterior (el 74% en 2017) debe reducirse al 50%. El necesario aumento del parque de plantas renovables tiene que hacerse de forma respetuosa con el territorio y muy especialmente con la España Vacía; respetando la voluntad de las poblaciones, abriendo la participación económica de las plantas a los agentes locales y estableciendo mecanismos de compensación a las zonas productoras como por ejemplo, un menor

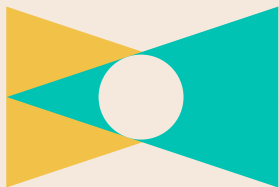


precio de la energía. Todo esto no solamente servirá para bajar la factura de la luz, para cuidar nuestro medioambiente y para crear cientos de miles de empleos, además, hará a nuestro país más soberano energéticamente y menos dependiente de los desequilibrios geoestratégicos ajenos a nuestro control. En esta década debemos también llevar a cabo **un cambio radical en nuestro modelo de transporte**. Nos marcamos como objetivos para esta década duplicar el número de viajes urbanos en bicicleta, duplicar el uso del transporte público urbano e interurbano —que deberá alcanzar el requisito de cero emisiones—, alcanzar los 8 millones de coches eléctricos, eliminar los vuelos en avión donde haya alternativa ferroviaria de 3 horas o menos y duplicar los viajeros del ferrocarril; desarrollando un nuevo mallado intermodal y mucho menos radial que conecte como se merece a la España Vacía con el resto del país. En esta década debemos también cambiar la tendencia respecto a la actual acumulación de residuos, recuperando más del 90% en algunas líneas mediante los sistemas SDDR y avanzando hacia el Residuo Cero. Debemos aumentar la superficie de zonas protegidas en un 30% incluyendo las zonas marinas protegidas y dotarlas al 100% de planes de gestión adecuados, así como detener definitivamente la destrucción de nuestro litoral frenando el urbanismo salvaje y especulativo. En esta década debemos recuperar el Mar Menor tras su declaración como Parque Regional y después de haber puesto fin al vertido de sustancias que lo envenenan. España cuenta con una biodiversidad única en Europa. Esta riqueza natural debe cuidarse y promoverse y es imprescindible que transitemos hacia una política de gestión del agua más ecológica y más sostenible. En esta década debemos conseguir que ningún municipio de más de 5000 de habitantes siga sin depurar sus aguas, debemos crear una empresa pública de energía que recupere los saltos hidroeléctricos para ponerlos al servicio de la gente y debemos también detener la contaminación de los acuíferos subterráneos, poniendo fin a los vertidos de macrogranjas. En esta década, también, debemos al menos duplicar la cantidad de recursos que se destinan a la limpieza de los bosques y los montes, así como a los equipos de extinción de incendios. Como dicen los jóvenes en las calles, no tenemos un planeta B, y es hora de traducir esa urgente convicción en políticas públicas valientes.



España puede y debe estar a la vanguardia mundial de la lucha contra el cambio climático y la transición energética y ecológica.

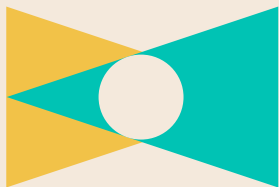
Todos estos profundos cambios en nuestra matriz productiva hacia una economía más industrializada y más sostenible serían imposibles **sin un esfuerzo sin precedentes en los ámbitos de la educación, de la ciencia y la innovación, así como en la transición digital de nuestra sociedad.** En esta década debemos aumentar la inversión en ciencia e innovación hasta el 3% del PIB, pasando de estar en la cola europea en esta materia a estar entre los países que más recursos destinan. Si algo nos ha salvado de la pandemia, además del confinamiento domiciliario de los primeros meses, han sido fundamentalmente las vacunas y no habría habido vacunas sin ciencia. Este es un aprendizaje que no debemos olvidar. Además, la Universidad pública debe ser gratuita, se deben aumentar las plazas públicas de FP hasta que ningún estudiante se quede sin poder estudiar y hasta que el sistema público alcance, como mínimo, el 50% del total de la red, y se deben aumentar las convocatorias anuales de contratos predoctorales, postdoctorales y de estabilización como funcionarios de carrera en las Universidades, el CSIC y los OPI hasta, al menos, duplicar las actuales y en ningún caso ser inferiores a las que había en el año 2007 más un 50%. En esta década España debe llevar a cabo un esfuerzo histórico para ponernos al día en materia de ciencia e innovación. Nuestro país tiene todas las ventajas competitivas necesarias para ser puntero en determinados sectores. Solamente falta la inversión. En una década debemos ser capaces de situarnos a la vanguardia en materias como la biología molecular, la investigación sanitaria, las energías renovables o las tecnologías digitales. En este último ámbito no solamente tenemos a la gente mejor formada, sino también una de las redes de alta velocidad más amplias de todo el continente (que debe ser, sin embargo, extendida a todos y cada uno de los municipios de nuestro país, muy especialmente aquellos situados en la España Vacía). Nuestro país puede situarse —en una década— a la cabeza de Europa en sectores innovadores como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, el blockchain, el desarrollo de aplicaciones, los efectos especiales o los videojuegos, generando cientos de miles de empleos de calidad en el camino. Para conseguirlo solamente hace falta poner los



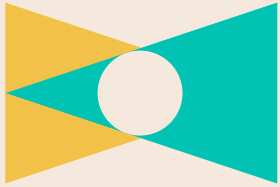
recursos necesarios y, por supuesto, que nuestros niños y niñas aprendan a programar ya desde la primaria.

Nos damos también esta década para materializar una de las enseñanzas del confinamiento: la necesidad que tenemos todas las personas de acceder a la producción cultural. Cómo nos sirven las miradas de otros y otras, desde el discurso cultural, para tener faros y anclas. Y eso significa **reconocer la producción cultural como sector estratégico de nuestra economía**. Una década para que desaparezca la informalidad del trabajo cultural y, por lo tanto, su precariedad, para que la actividad intermitente cuente con dignidad y derechos laborales. Una década en la que debemos invertir más en la industria cultural sabiendo que es un tejido casi en su totalidad de pymes y personas autónomas. En esta década debemos al menos multiplicar por tres la inversión pública en los Presupuestos Generales del Estado, asegurar una contratación justa y garante de derechos por parte de todas las Administraciones y facilitar, a través de una buena ley de mecenazgo, la inversión privada. Y, al mismo tiempo, garantizar su acceso en la mayor diversidad, multiplicar también por tres las bibliotecas públicas y salvar la desigualdad territorial asegurando que en cada pueblo y barrio hay centros municipales integrados donde se pueda participar de actividades culturales. Porque queremos el pan, pero también las rosas. En esta década debemos comenzar a hablar de culturas, en plural, porque en el conjunto del Estado existen distintas culturas, lenguas, arraigadas unas y también de otras procedencias. Todas importan, todas nos construyen y todas deben tener la oportunidad de llegar a su público, de crear nuevo público. Reconozcamos que cultura son también hábitos, vínculos, costumbres. Miremos a la tradición más allá de su relato único, y comprendamos su parte rebelde y emancipadora. En esta década debemos trasgredir el canon por el que unos pocos deciden qué es válido y qué no. La capacidad transformadora de la cultura debe partir de una enmienda al poder que lleva siglos validando casi solo aquello que no le molesta.

Mientras se produce esta profunda transformación económica, es vital que también consigamos **mejorar la calidad del empleo**. En esta década, y mediante diferentes medidas legislativas, debemos ser capaces de reducir la temporalidad y la parcialidad no deseada del mercado de

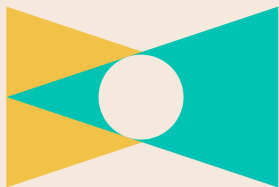


trabajo al menos a la mitad. Al mismo tiempo, se debe hacer un importante esfuerzo de aumento de salarios. Por supuesto, y tal y como está pactado en el acuerdo de Gobierno, el salario mínimo interprofesional tiene que llegar al 60% del salario medio al final de esta legislatura, pero tenemos que ir más allá. Durante toda esta década hay que continuar la senda de crecimiento del SMI por encima de la inflación —mejorando indirectamente el conjunto de todos los salarios y reduciendo la cantidad de trabajadores pobres—, con la aspiración de alcanzar salarios mínimos como los de Alemania o Francia (superiores a 1500 euros mensuales) como cuarta economía de la zona euro que somos. En esta década y teniendo en cuenta que llevamos 100 años ya con la jornada de 40 horas semanales, debemos reducir la jornada laboral con carácter general hasta las 30 horas semanales. Trabajar menos tiempo para que trabaje todo el mundo —muy especialmente, para reducir el muy elevado paro juvenil— y también para dejar espacio a la conciliación. Para poder producir todos estos cambios es fundamental recuperar el papel de las organizaciones sindicales y de trabajadores y la fuerza de la negociación colectiva como mecanismo principal para igualar el poder de las personas trabajadoras con el de las patronales. Tenemos, además, la obligación de **garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en los sectores más precarizados**. En esta década tenemos que acabar con el fraude de los falsos autónomos, a los que les dicen que son «emprendedores» y «empresarios de sí mismos» para explotarlos. Tenemos que hacer que los autónomos de verdad coticen por sus ingresos reales —que los que menos ganan paguen menos y los que ganan más paguen más—, para equiparar sus derechos a los de los trabajadores por cuenta ajena y también para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En esta década es obligación de nuestro espacio político y deuda histórica de nuestro país acabar con la precariedad de las kellys, de los empleados del hogar, de las jornaleras extremeñas y andaluzas, de los trabajadores del campo en todo el Estado y de todas esas personas —trabajadoras esenciales, como volvimos a recordar durante la epidemia— que son tan imprescindibles para la reproducción de la vida como maltratadas por un sistema injusto. Nunca más nos podemos permitir no cuidar a las que son el corazón incansable de nuestra sociedad.



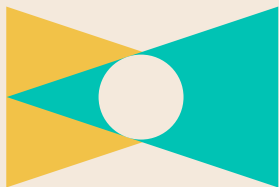
También en esta década España debe contar con **un parque público de viviendas a precios asequibles superior en términos porcentuales a la media europea**, al mismo tiempo que se impide la especulación inmobiliaria de los grandes tenedores mediante una regulación de los precios de los alquileres que tome como referencia la renta real de las familias, no superando el gasto en vivienda, en ningún caso, el 30% de la misma. Por supuesto, mucho antes del final de la década se deben haber prohibido todos los desahucios sin alternativa habitacional y los cortes de suministros de primeras viviendas que no puedan pagar la factura por motivos ajenos a su voluntad, y se debe haber establecido la dación en pago para la hipoteca de la vivienda habitual. En esta década debemos ser capaces de erradicar el sinhogarismo. La vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho fundamental. Esta es la convicción de principio que nos mueve, pero no está de más añadir que la liberación de renta disponible de las familias que supone un control sensato del mercado inmobiliario centrado en el interés general se traduce en una inyección importantísima al consumo privado y, por tanto, a la mejora global de la economía y el empleo. Dicho en pocas palabras, una política de vivienda que proteja a las personas retira dinero de la economía más improductiva y rentista para ponerlo en el comercio del barrio y en el resto del tejido empresarial.

A lo largo de esta década habrá quien dedique sus esfuerzos a intentar que volvamos a las reglas fracasadas de la austeridad. Evidentemente, semejante despropósito neoliberal haría imposible la transformación productiva y social que nuestro país necesita y cuyo horizonte estamos dibujando. Nunca más debemos permitir que la manera de cuadrar las cuentas sea recortar nuestros servicios públicos, las inversiones, los salarios y los derechos. Para poder sostener este esfuerzo modernizador **hay que dotar, en cambio, a las cuentas públicas de la necesaria suficiencia y hay que hacerlo con justicia fiscal**. En esta década España debe alcanzar un porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB superior a la media europea. Esto, además, debe hacerse sin aumentar los impuestos a los salarios bajos y medios ni a los autónomos con ingresos bajos y medios, ni a las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, se ha de alcanzar esta cota de ingresos mediante el **aumento impositivo a grandes rentas, a grandes fortunas y a**



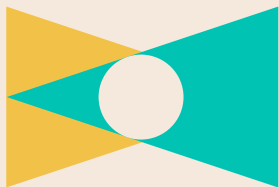
grandes corporaciones, así como mediante una intensificación significativa de la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. El cambio de rumbo en las reformas fiscales hacia una ampliación de la progresividad y la lucha contra el fraude permitiría no solo ampliar la capacidad recaudatoria del sector público y, por ende, mejorar la sostenibilidad macroeconómica de las cuentas públicas, sino también —junto al gasto público— generar una distribución de la renta más justa e igualitaria. En concreto y a lo largo de esta década, se llevarán a cabo las reformas para establecer un impuesto de sociedades en el cual las grandes empresas paguen un tipo impositivo efectivo no inferior al que pagan las pymes, un impuesto a la riqueza que no pueda ser eliminado por determinadas comunidades autónomas en clave de paraíso fiscal interior, un impuesto a la banca que permita recuperar antes de 2030 la totalidad del rescate bancario y un impuesto de la renta que incluya tipos más altos para los salarios más cuantiosos y, especialmente, que equipare la imposición sobre los rendimientos del capital a la de los rendimientos del trabajo. En el ámbito de la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal, debemos primero aumentar los efectivos de la Agencia Tributaria hasta alcanzar al menos la media europea, así como reestructurar sus funciones para poner el foco en las grandes fortunas y las grandes empresas, que es donde se produce el 70% del fraude. Además, se debe crear una lista española de países de baja tributación (paraísos fiscales), se debe prohibir la elusión fiscal (obligando a que las empresas y los particulares tributen en aquellos territorios que tengan alguna relación real con su actividad económica), así como prohibir el uso de las sociedades pantalla para hacer negocios particulares. En esta década tenemos que conseguir que nuestro sistema fiscal sea justo y decente, que no paguen siempre la factura los mismos y que arrimen el hombro —por una vez— los que más tienen.

Del mismo modo que no puede alcanzarse el ambicioso horizonte de transformación del país que aquí se dibuja sin justicia fiscal, **tampoco puede hacerse sin justicia social.** Por ello, nos fijamos el objetivo de reducir —en esta década— el porcentaje de población en situación de carencia material severa del actual 7% a menos del 1%, así como reducir el número de personas en riesgo de pobreza, del entorno actual del 21%, y también la insoportable pobreza infantil (de alrededor del 28%) a menos del 5%



(ambas). Siempre hemos dicho que **la erradicación de la pobreza es una cuestión de voluntad política**. Para ello, en esta década hay que subir las pensiones mínimas y no contributivas de forma que alcancen, como mínimo, la cuantía del SMI, y lo mismo debe hacerse con los sistemas de garantía de ingresos, que deben eliminar el laberinto burocrático que ahora rodea al ingreso mínimo vital (para poder llegar a todo el mundo que lo necesite), que deben estar complementadas con ayudas generales a la crianza y que deben tener un sistema de incremento cuando se consigue un empleo para escapar de la «trampa de la pobreza».

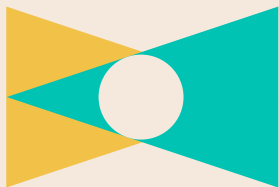
En el centro de la justicia social debemos poner a las personas jóvenes y, después de una década absolutamente perdida para ellas, **tenemos la obligación como país de que esta década sea la década de los y las jóvenes**. Porque España se lo debe, pero también porque es una soga al cuello para cualquier sociedad no aprovechar la energía, la inteligencia, la fuerza, la creatividad y la mirada nueva de las generaciones más jóvenes. Un país que no es capaz de insertar a su juventud en los procesos productivos, sociales, políticos y culturales es un país incapaz de ir hacia adelante. Si queremos alcanzar el horizonte de país que aquí se dibuja, tiene que ser con las personas jóvenes. Sin ellas es sencillamente imposible. Por ello, hemos planteado a lo largo de todo este manifiesto importantes medidas para reducir las inaceptables carencias materiales que sufre en la actualidad nuestra juventud: una política de vivienda avanzada que permita la emancipación al menos alrededor de la media europea (26 años) y no como ahora que estamos a la cola, una reducción valiente de la precariedad en el mercado laboral o una apuesta decidida por la educación universitaria y de FP para dar formación en todos aquellos ámbitos que tienen que ver con los nuevos sectores productivos. En esta década debemos ser capaces de bajar el paro juvenil como mínimo a una tercera parte de los inaceptables valores actuales. Las deficiencias de índole material, junto a la habitual criminalización mediática y la falta de alternativas de ocio saludable, están provocando serios problemas de salud mental entre nuestra juventud que deben ser abordados desde la sanidad pública y con un enfoque empático y comprensivo. Por último, nuestro espacio político considera a los y las jóvenes sujetos de derechos



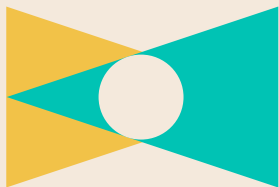
y actores decisorios de su propio devenir social y vital y, por ello, debemos reducir la edad mínima requerida para el derecho al sufragio a los 16 años.

Y la misma justicia social que merece la juventud no puede dejar cualquier otra consideración. Por ello, en esta década, se debe derogar la Ley de Extranjería, sustituyéndola por una norma respetuosa con los derechos humanos y sin trazas de racismo institucional. Debemos agilizar los procesos de asilo, de arraigo y de acceso a la nacionalidad, reduciendo a la mitad los plazos formales y a la décima parte los plazos administrativos —en estos momentos, insultantemente largos— mediante el aumento de los recursos humanos y materiales de las Administraciones competentes. A corto plazo se debe regularizar de forma extraordinaria a la gran bolsa de personas sin papeles que se ha acumulado en los últimos años como consecuencia de unas políticas de extranjería crueles e ineficaces. Frente al odio racista de la ultraderecha, amplificado por ciertos poderes mediáticos, nosotros y nosotras debemos ser claros y firmes en la defensa de los derechos humanos y debemos mantener con contundencia que dar derechos de ciudadanía a las personas que vienen a vivir y trabajar a nuestro lado no solamente es lo decente y lo correcto desde el punto de vista moral; además, es lo más inteligente desde el punto de vista económico. Basta ver los problemas que está teniendo una potencia mundial como el Reino Unido por la falta de trabajadores como causa del brexit, basta calcular la reducción de la economía sumergida y el aumento de ingresos que produce el tránsito a la regularidad o los efectos positivos que ello tiene en la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En esta década **España debe situarse a la vanguardia europea del reconocimiento de los derechos humanos y civiles de las personas migrantes**, y eso hará que nos situemos también a la vanguardia de la prosperidad económica.

Si de verdad queremos alcanzar un horizonte de país mejor que no deje a nadie atrás, además de la justicia fiscal y la justicia social, tenemos que poner en el centro del nuevo modelo económico y productivo **la justicia territorial y la protección, recuperación y desarrollo de la España Vacía**. Esta convicción forma parte del ADN de nuestro espacio político. En términos de políticas públicas, este elemento es transversal; es decir, debe estar presente en todas ellas. Por eso en los párrafos anteriores podemos

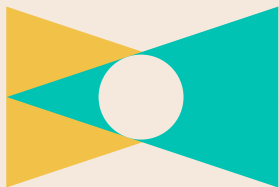


encontrar muchas medidas que serían determinantes para el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía y del ecosistema en la España Vaciada: el transitar hacia un modelo de cuidados de larga duración en el domicilio y no tanto residencial, la protección de los pequeños y medianos productores de agricultura y ganadería extensiva frente a las prácticas abusivas del agronegocio intensivo y contaminante, la obligación de las Administraciones Públicas de alcanzar una tasa del 100% de consumo alimentario de proximidad, la instalación de plantas renovables respetando la voluntad de las poblaciones, abriendo la participación económica de las plantas a los agentes locales y estableciendo mecanismos de compensación a las zonas productoras como, por ejemplo, un menor precio de la energía, la apuesta por una red ferroviaria intermodal y mallar que conecte más y mejor la España Vaciada con el resto del país, el aumento decidido de la cantidad de recursos que se destinan a la limpieza de los bosques y los montes, así como a los equipos de extinción de incendios, la extensión de la banda ancha a todos los municipios de nuestro país o poner fin a la precariedad de las jornaleras extremeñas y andaluzas y de los trabajadores del campo en todo el Estado. Además de todo esto, es fundamental garantizar la cobertura de servicios públicos en la España Vaciada mediante la ampliación de la red de escuelas rurales, la atención primaria, la atención a domicilio y la asistencia personal del sistema de dependencia, la garantía de transporte público desde cualquier núcleo de población a la cabecera de comarca o la disponibilidad de una patrulla de la Guardia Civil a menos de 15 minutos. Asimismo, se debe fomentar la actividad privada en la España Vaciada mediante ayudas e incentivos a las empresas que quieran instalar su base de operaciones en el territorio. Tener todo esto en cuenta y en el frontispicio de nuestra actividad política no tiene solamente que ver con que cada persona tenga derecho a vivir en su pueblo y no se vea forzada a emigrar o con la conservación de nuestro patrimonio cultural. En una época en la que existe la posibilidad de teletrabajar y en la que tenemos claro que un objetivo principal de nuestra sociedad es la protección del medioambiente y la soberanía alimentaria y productiva, la reversión del proceso de despoblación de la España Vaciada y la incorporación de todo el capital humano que en ella habita al proceso de reconstrucción y desarrollo del país parecen —por primera vez en mucho



tiempo— no solamente posibles sino, además, un curso de acción inteligente, eficaz y, de hecho, obligatorio.

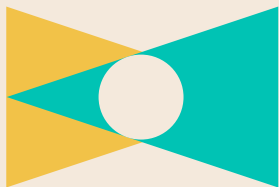
Por último, esta década debe ser **la década del mayor avance en todos los derechos y libertades democráticas y de participación política en nuestro país**. Debe ser la década en la que acabemos de eliminar la vergüenza antidemocrática del voto rogado, que limita el derecho fundamental al sufragio de nuestros compatriotas en el extranjero. La década en la que garanticemos **los derechos de los animales**, nuestros compañeros de planeta; en la que alcancemos el abandono cero y el maltrato sea severamente castigado. Al final de la década no recordaremos cuando se sacrificaban animales abandonados en las perreras de nuestro país y habremos dejado atrás el considerar cultura espectáculos donde se maltrata animales. La tauromaquia no será bien de interés cultural y solo será un mal recuerdo de un pasado en blanco y negro. En esta década se debe legalizar el uso medicinal y el uso adulto del cannabis, situando a España en la vanguardia mundial de las libertades, al mismo tiempo que se genera un enorme sector productivo con una potencialidad de crear cientos de miles de empleos y miles de millones de euros de ingresos del Estado con todas las garantías sanitarias. En esta década también debemos acabar de eliminar de nuestro Código Penal delitos medievales como las injurias a la Corona o la ofensa a los sentimientos religiosos, que atentan seriamente contra la libertad de expresión y que nos hacen pasar vergüenza internacional por no estar homologados con los países de nuestro entorno europeo. Frente a los que devalúan la palabra libertad, circunscribiéndola a la libertad del dinero y a la libertad para gastar, nosotros y nosotras la sabemos mucho más amplia y así la defendemos. En esta década tenemos que **alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición respecto de nuestra memoria histórica**. Es una cuestión de dignidad de país que cumplamos nuestras obligaciones democráticas con las víctimas del franquismo y con todas las personas que lucharon por la democracia y la libertad contra el régimen fascista. No seremos un país decente hasta que eso no ocurra. Asimismo, en esta década debemos alcanzar de una vez por todas la **laicidad del Estado**, acabando con el Concordato con la Santa Sede, así como con todos los privilegios fiscales, educativos, inmobiliarios, mediáticos, institucionales y económicos de los que disfruta injustamente



la Iglesia católica. Desde el máximo respeto a la espiritualidad y a la libertad religiosa y de culto, en una democracia sana no puede existir ningún tipo de organización que esté por encima de las leyes que rigen a todas las demás. Por último, debemos derogar la actual ley de secretos oficiales, promulgada en época franquista y que protege bajo el manto del silencio los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, y debemos derogar también las leyes mordaza que aprobó el Partido Popular en la época más cruda de la anterior crisis financiera para reprimir a las personas que se manifestaban contra los recortes y limitar el derecho constitucional de reunión y manifestación. En esta década tenemos que dejar definitivamente atrás la democracia limitada y tutelada surgida de la Transición, para avanzar hacia una democracia que podamos verdaderamente llamar plena.

Este horizonte democrático, de justicia social y prosperidad que dibujamos en estas líneas es ilusionante y es posible. Las gentes y los pueblos de nuestro país tienen todo lo que hay que tener para construir esa sociedad mejor de la que sentirnos orgullosos y orgullosas. **Pero la tarea no es fácil.** Ningún derecho de los de abajo, ningún avance para las mayorías sociales se ha conseguido mediante concesión graciable por parte de los poderosos. Cada paso que las sociedades han ido dando hacia sistemas más justos de reparto de la riqueza y de las libertades ha sido ferozmente combatido por el poder económico —el poder de facto— y sus brazos políticos, judiciales, mediáticos y (confiamos que solo en el pasado de nuestro país, aunque algunos lo añoren) también militares. El presente en el que vivimos y el futuro que queremos empujar no van a ser una excepción a esta regla y cualquier proyecto emancipador ha de tenerlo permanentemente en cuenta.

Como ha ocurrido incesantemente desde que nacimos, van a intentar desmoralizarnos repitiéndonos las conocidas mentiras de que «no se puede» (traducción: ellos no quieren) y «todos son iguales» (traducción: ellos son corruptos y les gustaría que nosotros lo fuéramos también), van a difamar y a sembrar dudas sobre cualquier persona que se ponga al frente del proyecto, van a mentir sobre nuestras propuestas, nuestros objetivos y nuestras intenciones, van a intentar dividirnos y que caigamos en la peor trampa de todas: estar todo el rato hablando de nosotros mismos en vez de hablar de los problemas de la gente y de los retos y oportunidades de país,

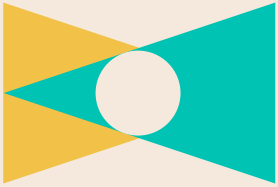


van a usar determinadas estructuras del Estado para amedrentarnos con apariencia de legalidad y van a azuzar a sus columnas más ultras y agresivas para intentar meternos miedo y que abandonemos nuestro empeño.

Todo esto va a ocurrir, porque ya lo hemos vivido y porque siempre ocurre así. Es el precio que hay que pagar por querer cambiar las cosas, pero no es solamente eso. También son unas clarísimas y férreas condiciones de contorno —casi leyes de la física— que nos obligan a **recordar cada día el horizonte hacia el que caminamos y a revisar periódicamente la brújula, que nos requieren paciencia, persistencia y mirada larga** y que nos informan con nitidez sobre **la forma más inteligente y eficaz de estar en el proyecto** y sobre la pregunta más difícil —y, a la vez, más útil— de contestar de cualquier movimiento social y político: **¿Qué hacer?** ¿Qué tareas concretas debemos acometer cada uno de nosotros y nosotras para alcanzar los objetivos marcados?

En el plano político, y como ya hemos dicho, **es condición necesaria para poder construir un país mejor que encabecemos el Gobierno de España como fuerza mayoritaria.** Es condición necesaria pero no suficiente. Es decir, si esto no ocurre, no habrá cambios profundos en nuestro país, pero si esto es lo único que ocurre, tampoco los habrá.

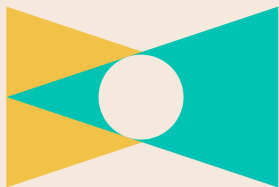
Además de trabajar para encabezar el Gobierno, tenemos que ser conscientes de que somos una parte de un bloque de dirección de Estado. Ese bloque, como ocurre con el actual Gobierno de coalición y como deberá ocurrir con el Gobierno encabezado por nuestro espacio político, es un bloque progresista y plurinacional en el que no estamos solos. En ese bloque también están las fuerzas políticas catalanas y vascas y, en ese bloque, también está el PSOE. **Estos son nuestros aliados estratégicos y debemos cuidar esa mayoría progresista y plurinacional** para que los avances democráticos se vayan acumulando y no aparezcan en el camino peligrosas involuciones reaccionarias en la forma de un Gobierno de ultraderecha PP-VOX. Es evidente que hay importantes diferencias con nuestros aliados estratégicos —varias de las fuerzas vascas y catalanas son independentistas y nosotros no lo somos; el PSOE es monárquico y nosotros no lo somos—, pero trabajar juntos es un imperativo histórico y el cuidado de esas alianzas una tarea política central.



Por supuesto y como forma parte de nuestra tradición política desde que nacimos, también debemos trabajar para **ampliar nuestro propio espacio político a nuevos sectores sociales, referentes de la sociedad civil y otras fuerzas que quieran trabajar de la mano en un horizonte de país ilusionante.** En 2016 ya fuimos capaces de congregarnos la mayor coalición de fuerzas políticas transformadoras en España y tenemos la voluntad, la capacidad y la convicción de volver a hacerlo.

Asimismo y por motivos que han sido ampliamente explicados, es fundamental **extender el fin del control bipartidista más allá del Parlamento y del Ejecutivo.** Al ser el Legislativo el poder elegido directamente por la gente y al ser relativamente sencillo fundar partidos políticos en España, es natural desde el punto de vista de la cronología histórica que los cambios sociales lleguen primero al sistema de partidos y al Parlamento. Ya en 2015, el sistema del turno bipartidista desapareció del Congreso de los Diputados, inaugurándose una nueva época política multipartidista en España que no parece tener horizonte final a la vista. Sin embargo, tuvimos que esperar a finales de 2019 para que ese cambio en el sistema de partidos llegara al Gobierno de España —un poder no elegido de forma directa pero todavía muy conectado a la soberanía popular— tras la ruptura de la antidemocrática cláusula de exclusión histórica que impedía a formaciones como la nuestra formar parte del Gobierno. El fin del control bipartidista del poder ha llegado ya hasta el Ejecutivo, pero todo el mundo sabe llegar al Gobierno no es llegar al poder.

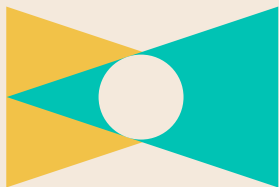
En estos momentos, en este punto de bifurcación histórica, vivimos en un interregno. Vivimos una situación en la que **el bipartidismo ha sido roto en los dos poderes más conectados con la voluntad popular, pero permanece atrincherado y fuerte en otros lugares de poder menos democráticos.** El ejemplo más evidente es un Consejo General del Poder Judicial con su mandato y, por tanto, su legitimidad democrática caducados desde hace más de cinco años; un poder completamente desconectado de la voluntad popular y con una configuración política que hace años ha dejado de existir. Pero no es el único ejemplo. Hay muchos otros lugares de poder deficitariamente democráticos o directamente antidemocráticos



que aún siguen bajo el control bipartidista y aislados de la nueva realidad social. Podemos mencionar el Tribunal Constitucional, que, con varios de sus magistrados con el mandato caducado, se dedica a tumbar decisiones del Ejecutivo y del Legislativo a instancias de la ultraderecha; podemos mencionar el Tribunal de Cuentas, con todos sus vocales con el mandato caducado y muy interesado en la política catalana; determinadas zonas del Estado profundo, que se hacen visibles periódicamente en ciertos sectores de la judicatura, el ejército o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; o a los grandes poderes mediáticos, quizás el principal poder político de este país aunque nadie los haya votado.

A menudo se ha intentado encajonar a las fuerzas políticas emancipadoras intentando circunscribir nuestra actividad a los «ámbitos sociales» (derechos laborales, servicios públicos, lucha contra la pobreza, derechos de las minorías, políticas de vivienda, etc.). Todo ello es muy importante y además está en el centro de nuestro ADN y de nuestro proyecto de país, pero entender que nuestra actividad política empieza y acaba en ese ámbito es una trampa. Es imposible construir un país mejor en lo social sin democratizar la mayor cantidad posible de lugares de poder. Cuantos más lugares de poder aislados de la democracia puedan servir para que la reacción se atrinchere en ellos y trabaje contra la voluntad popular, más difícil será sacar adelante un proyecto político-social y alcanzar un horizonte de país como el que se dibuja en este manifiesto. Por ello **es también una tarea política fundamental llevar el cambio democrático y el fin del bipartidismo a todos los lugares de poder de nuestra sociedad.** No hay ninguna ideología ni ninguna clase social que tenga derecho a mandar más que las demás sin someterse a la voluntad de las urnas. Nosotros y nosotras siempre hemos tenido clarísimo que es imposible que un pueblo alcance la justicia social si no alcanza antes el poder y por eso nos han atacado con tanta violencia.

En ese camino, además, nos iremos acercando cada vez más a la irrenunciable e irremediable **república solidaria y plurinacional** en la que nuestro país se debe convertir mediante una nueva Constitución del siglo XXI. Porque las generaciones más jóvenes así lo demandan, porque la corrupción de la monarquía es una gangrena que ningún sistema democrático puede soportar, como no se puede admitir en pleno siglo XXI que el jefe del Estado no

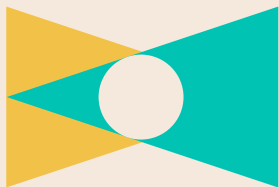


se elija por sufragio sino por fecundación, porque el centralismo monárquico es uno de los principales focos de los conflictos territoriales y una república solidaria y plurinacional su solución, y porque avanzar en derechos sociales, en igualdad, en reparto de la riqueza y en la democratización de la economía y el poder no es otra cosa que hacer cada día más reales y presentes los principios republicanos.

Nosotros y nosotras no queremos únicamente que haya cambios puntuales, nosotros y nosotras queremos que haya cambios estructurales y profundos y que sean permanentes. **Nosotros y nosotras conformamos un proyecto político con voluntad de continuidad en el tiempo.** Por eso establecemos la obligación de democratizar todos los lugares de poder y, por eso también, señalamos otra serie de tareas mucho más descentralizadas, que tienen mucho más que ver con el abajo que con el arriba y sin las cuales nuestro proyecto tendría los pies de barro: **las tareas en los territorios, en los pueblos y en los barrios de nuestro país, las tareas militantes, las tareas comunitarias y la participación y la relación con los movimientos sociales y la sociedad civil organizada.** En este difícil pero ilusionante viaje hacia un país mejor, hay trabajo para todos y todas.

En esta década habrá al menos dos elecciones generales, dos elecciones autonómicas y municipales en su modalidad sincronizada y un número similar de elecciones autonómicas en aquellos territorios que tienen potestad para decidir su propia fecha. Después del enorme esfuerzo que ha supuesto romper el bipartidismo en el Congreso de los Diputados y también en el Gobierno de España, en esta nueva época, es **la tarea más importante —decimos bien: la más importante— fortalecer el proyecto político y su organización en cada rincón de nuestro país.** Esto lo tenemos muy claro, pero ¿cómo se hace?

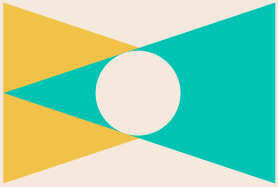
Por supuesto y dada nuestra forma de entender la política, un objetivo fundamental para conseguir fortalecer el proyecto en todos los territorios pasa por **mejorar nuestros resultados electorales en las elecciones autonómicas y municipales** y aumentar el número de diputados y de concejales en los diferentes lugares, así como nuestra participación de los correspondientes Gobiernos. Si encabezar el Gobierno de España como la fuerza mayoritaria es condición de posibilidad para que pueda haber cambios profundos y



permanentes en el conjunto del país, lo mismo puede decirse en el ámbito de los Ayuntamientos y los Gobiernos autonómicos (y los Cabildos, y los Consells insulares, y las Diputaciones forales vascas, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla). De nuevo, es condición necesaria pero no suficiente. Antes y después de las elecciones autonómicas y municipales hay que hacer muchas cosas más.

En la nueva época y para cumplir el objetivo fundamental del fortalecimiento territorial, **las tareas militantes han de ocupar un papel central**. En la nueva época, la militancia de base es uno de los elementos más importantes del proyecto político y, sin ella, no se podrá alcanzar el ambicioso horizonte de país que nos hemos propuesto. Una militancia que debe ser flexible y adaptable a cada una de las personas —hay tareas, como decíamos, de todo tipo y para todos y todas—, que debe servir también para que nos sintamos útiles aportando nuestro granito de arena, que debe ser divertida y que debe responder a una determinada forma de estar en el proyecto: coherente con lo que somos, consciente de los enemigos que tenemos, inteligente, empática y eficaz. Una militancia de base que huya de lo burocrático y lo procedimental, que no pierda el tiempo con absurdos conflictos internos, que ponga en el centro los cuidados, que sepa dejar paso generosamente a otras compañeras cuando llegue el momento, como hizo Pablo, y que esté mucho más basada en hacer que en decir.

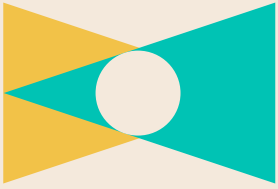
Hay que poner en valor la militancia, poner en valor lo que significa formar parte de una organización colectiva, ya sea un movimiento social, un partido político, un sindicato... cualquier forma de organización colectiva. Porque la militancia implica dedicar tu tiempo, dedicar tu esfuerzo, dedicar tu pensamiento, dedicar una parte muy importante de tu vida y, a la vez, implicar a tu familia, a tus amigos y amigas, a la gente que quieres en un proyecto que tiene por objetivo la defensa del bien común. La militancia es, también, crear unos lazos de pertenencia, crear unos lazos de solidaridad, de afecto, de cuidado entre nosotras, que nos permitan no solamente satisfacer determinadas necesidades que todavía las instituciones no satisfacen, sino poder imaginar otras formas mejores de vida que las que ahora tenemos, poder imaginar que es posible cambiar las cosas para que todos y todas vivamos mejor. Militar significa querer para la gente que no conoces de nada



lo mismo que para la gente que más amas y eso es un acto increíble de amor. Es un acto de amor y es la única forma posible de estar en el mundo con cierta decencia y saberte interpelado por el dolor, por la felicidad y por la alegría ajenas y saber que tenemos que trabajar juntas para ser capaces de cambiar aquellas cosas que no funcionan y construir sociedades donde todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida sin tener ningún tipo de miedo, sin sufrir discriminaciones y sin tener muchos problemas, como ocurre ahora para la juventud, para las mujeres, para las personas en situación de dependencia, para las personas migrantes, para poder desarrollar sus proyectos de vida.

El viaje es largo y difícil y es una obligación política de todo el proyecto hacer que militar en él sea acogedor, ilusionante y lleno de retos, pero también de compañeros y compañeras que sabes que siempre van a estar ahí y nunca te van a dejar caer. Es vital que esto sea así porque la militancia tiene muchas tareas que hacer.

En primer lugar, la tarea de comunicar. Si las clases privilegiadas tienen a su servicio a los grandes poderes mediáticos y sus cañones televisivos y radiofónicos, nosotros y nosotras no tenemos otra arma más que nuestras bocas y oídos. Ante la desinformación y los bulos, ante los intentos interesados por difamarnos y sembrar dudas sobre nosotros, ante la manipulación que busca adulterar la democracia, nuestro proyecto político no puede sobrevivir sin un verdadero ejército de comunicadores populares que den —todos los días— la batalla de los argumentos y de la verdad en cada red social, en cada grupo de WhatsApp, en cada lugar de trabajo, en cada cena familiar, en cada parada de autobús y en cada barra de bar. Y a esta indispensable tarea de hormiguitas en nuestra vida cotidiana también debe acompañarle una labor más organizada. En la nueva etapa deben florecer por todo el territorio los proyectos comunicativos locales: pequeñas radios, pequeños periódicos, pequeños proyectos audiovisuales utilizando las nuevas tecnologías. Siempre intentando acercarse a la gente que no nos conoce o desconfía de nosotras en vez de esperar que se acerquen ellas. Por supuesto, no hay que dejar de lado los foros de debate y las actividades de formación política sobre temas más complejos, pero nunca

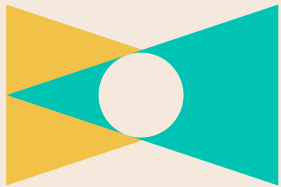


debemos olvidar la importancia de comunicar no tanto hacia nosotros mismos como hacia afuera.

Es fundamental también **la labor militante en tareas comunitarias**. Ayudar a los demás en nuestro pueblo o en nuestro barrio —sin importar a quien vota cada uno— es una de las actividades políticas más importantes que un militante puede llevar a cabo. Por innumerables motivos: porque siempre es lo decente y, en tiempo de necesidad, todavía lo es mucho más. Porque no hay nada más reconfortante y enriquecedor en términos personales. Porque ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. Porque esa labor de ayuda y acompañamiento nos permite conocer mucho mejor los conflictos sociales y los defectos del sistema. Porque es una de las actividades formativas más eficaces que puede haber. Porque todo el mundo en el barrio y en el pueblo debe saber que, si se acerca a un militante de nuestra organización, va a encontrar un hombro donde apoyarse y una mano que coger. Ayudar en bancos de alimentos, asesorar a las personas que necesitan pedir una ayuda y no saben cómo hacerlo, poner el cuerpo para parar un desahucio, organizar bancos de tiempo para dar clases de apoyo a niños y niñas que no se lo pueden permitir, todo esto y todas las cosas que se nos puedan ocurrir en esta dirección son tareas profundamente políticas y enormemente útiles. A veces mucho más que las tareas que desempeñamos en las instituciones.

Las elecciones no se ganan en las dos semanas que dura la campaña electoral, no se ganan con los debates televisivos entre los candidatos, no se ganan con las entrevistas en portada; y las elecciones municipales y autonómicas todavía menos. Estas tareas militantes no solamente sirven para que podamos hundir raíces en el territorio y asegurar nuestra voluntad de continuidad en el tiempo, no solamente sirven para que nuestra militancia se forme en los conflictos y aprenda haciendo; sirven, además, para que la ciudadanía vea que estamos siempre ahí y no únicamente cuando toca pedir el voto. **El objetivo de aumentar nuestra representación institucional territorial no es un objetivo separado de estas tareas militantes**. Es absolutamente dependiente de las mismas.

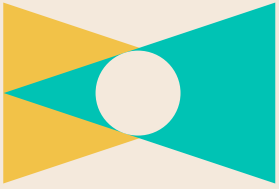
Por último —en orden pero no en importancia—, nuestra voluntad de permanencia en el tiempo no tiene únicamente que ver con la permanencia de nuestra propia organización, sino que va mucho más allá. Nosotros y



nosotras somos profundamente conscientes de que el cambio político y los avances sociales serían absolutamente imposibles sin los movimientos y sin una sociedad civil organizada, vigorosa y movilizada. A diferencia de nuestros adversarios, que prefieren a la gente en sus casas, callados, separados y preocupados en sus propios problemas personales, nosotros sabemos que la única manera de que la vida de cada una de nosotras pueda mejorar de una forma segura y duradera en el tiempo pasa por las luchas colectivas y por las batallas que damos en común. Por eso situamos como una tarea política fundamental la participación en los movimientos sociales y la relación estrecha con ellos. **Para nosotros y nosotras es un objetivo tan importante o más que el fortalecimiento de nuestra organización el fortalecimiento de la sociedad civil organizada.** En un sistema en el que el director de un fondo buitre puede llamar directamente a un Gobierno, es vital para la democracia que se escuche también a la gente corriente. Al movimiento feminista, a los pensionistas, a los colectivos que luchan por el derecho a la vivienda y a tantísimos otros sin los cuales muchos de los logros de nuestro espacio político en los últimos años no se habrían podido conseguir.

Es importante que nuestra militancia participe de los movimientos sociales, porque es una de las labores más útiles para la sociedad que se pueden llevar a cabo, porque supone una formación política de primer nivel y porque permite conocer en detalle aquellos problemas de la ciudadanía que queremos resolver. Es también clave que nuestros representantes institucionales mantengan una interlocución permanente con los movimientos y seamos una eficaz correa de transmisión de sus demandas, porque es garantía de que no nos vamos a equivocar nunca de bando, porque nos permite hacer mejores leyes y tomar mejores medidas y porque los fondos buitres ya tienen con quien reunirse.

Nosotros y nosotras no pensamos que el movimiento político y social del que tenemos el orgullo de participar se acabe en los límites de nuestras organizaciones políticas. Al revés, nos sentimos parte de toda esa amplia sociedad civil movilizada que comparte con nosotros y nosotras ese horizonte —ese anhelo— de un país mejor. De toda esa gente que —organizada o no— trabaja todos los días para que, en su familia, en su barrio, en su pueblo, en su lugar de trabajo haya un poquito más de luz y un poco menos de oscuridad.



A toda esa gente decente (a ti) queremos hacer **un llamamiento**. Acompáñanos en este viaje. Es duro y es difícil pero vale la pena. Necesitamos tus manos, tu cabeza y tu corazón para poder cambiar las cosas. Tenemos un horizonte claro, tenemos hoja de ruta y tenemos muchas tareas que hacer. Te mereces un país mejor y también se lo merecen los tuyos. Te van a decir miles de veces que no se puede, pero es mentira. En estos años, hemos demostrado una y otra vez que mienten. Porque la mejor manera de demostrarlo es haciéndolo. Por eso queremos que vengas con nosotros y nosotras. Porque viajar acompañados es mucho mejor, pero también porque queremos estar contigo, dentro de una década, cuando miremos hacia atrás y digamos —con una sonrisa—:

«Sí se pudo, y lo hicimos juntas».

PODEMOS